

SRA/2022



SEGURIDAD REGIONAL AMERICANA
ARS 2022 / AMERICAN REGIONAL SECURITY REPORT

INFORME
Abril 2022



Universidad
de Navarra

© Abril 2022

Center for Global Affairs & Strategic Studies

Universidad de Navarra

Facultad de Derecho–Relaciones Internacionales

Campus Pamplona: 31009 Pamplona

Campus Madrid: Marquesado Sta. Marta 3, 28027 Madrid

<https://www.unav.edu/web/global-affairs>

SRA/2022



SEGURIDAD REGIONAL AMERICANA *ARS 2022 / AMERICAN REGIONAL SECURITY REPORT*

INFORME
Abril 2022

El fin del Covid retorna la seguridad a esquemas prepandemia



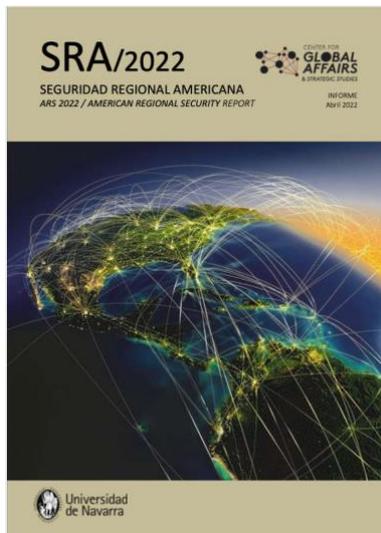
El último año ha sido el de la reactivación en los diferentes órdenes socioeconómicos, tras la gran parálisis de actividad de 2020. La progresiva normalidad que fueron alcanzando los países a lo largo de 2021 también significó una paulatina vuelta en toda América a las dinámicas habituales de seguridad. Si bien los primeros compases de la ‘diplomacia de las vacunas’ desarrollada por China y Rusia dio un protagonismo inicial a esas potencias extrahemisféricas, el avance de los programas de vacunación gracias a una gran aportación de vacunas ‘occidentales’ restó peso al juego geopolítico que, comenzado 2022, ha vuelto a poner sobre la mesa el conflicto de Ucrania.

Centrados en sus asuntos nacionales, absorbidos por los esfuerzos para superar las sucesivas olas de Covid-19, los países latinoamericanos vieron cómo en 2021 sus cuestiones de seguridad retornaban a los esquemas prepandemia, incluso agravadas: en Venezuela emergió un ‘conflicto armado’ con características más propias de Colombia; en Chile se encontró el problema mapuche con la llamada de grupos radicales a la ‘lucha armada’ y el despliegue del Ejército; en Haití la inseguridad general llegó hasta el magnicidio, y en República Dominicana se optó por construir un muro fronterizo para intentar aislarse de los problemas haitianos. También en el narcotráfico, que no cesó durante el confinamiento, cabe hablar de normalidad acrecentada: las muertes por sobredosis en EEUU alcanzaron un nuevo récord, tras el aumento de la producción de fentanilo y otros opioides sintéticos en México.

Sin duda el aspecto más disruptivo en materia de seguridad y defensa a nivel mundial fue la invasión de Ucrania en febrero de 2022. A raíz de esa crisis, Cuba ha vuelto a priorizar su relación con Rusia, ante la falta de señales de Washington –sí enviadas a Venezuela– de algún tipo de premio por evitar un estrecho alineamiento con Moscú. Pero una completa mirada a las consecuencias en el continente americano de esa guerra queda para el informe del próximo año.

Emili J Blasco

Center for Global Affairs & Strategic Studies



CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO

La salida de la pandemia devuelve a Latinoamérica a sus dinámicas de seguridad habituales 5

PRESENCIA EXTRAHEMISFÉRICA

Cuba vuelve a priorizar a Rusia ante la guerra en Ucrania y la falta de señales positivas de EEUU 8

NARCOTRÁFICO

El aumento de fentanilo desde México marca el récord de sobredosis en EEUU en la pandemia 11

CONFLICTO FRONTERIZO

El ‘conflicto armado’ se instala en Venezuela de la mano de las guerrillas colombianas 14

CONFLICTO FRONTERIZO

Santo Domingo levanta un muro para ‘aislarse’ de los problemas de la vecina Haití 17

SEGURIDAD CIUDADANA

Magnicidio en Puerto Príncipe, laberinto de luchas de poder y negocios ilícitos 20

SEGURIDAD CIUDADANA

La violencia mapuche se encona en Chile sin que la llegada de Boric al Gobierno pause el conflicto 23

CIBER

Chile impulsa la conexión por cable submarino con la Antártida y con Asia 26

NO PROLIFERACIÓN

30 años de cooperación nuclear entre Brasil y Argentina para superar el recelo atómico mutuo 29



Llegada a El Salvador en marzo de 2021 de vacunas tramitadas por el mecanismo COVAX de la ONU [OPS]

RESUMEN EJECUTIVO

La salida de la pandemia devuelve a América Latina a sus dinámicas de seguridad habituales

A lo largo de 2021 el mundo estuvo recuperándose de la pandemia de Covid-19. En Latinoamérica el ritmo de vacunación fue más lento que en Europa y Estados Unidos, pero a finales de año, con una parte notable de la población inmunizada (a excepción de unos pocos países) y con el repunte económico ya en marcha (menor del que hubiera cabido esperar a tener de la caída previa del PIB), la región recobraba muchos aspectos de su *normalidad*, también en materia de seguridad. Curiosamente, lo extraordinario de los primeros meses de 2022 –la guerra de Ucrania– venía a revalidar viejos esquemas, como el interés de Rusia por potenciar sus relaciones con ciertos gobiernos del Hemisferio Occidental cuando su pulso con Estados Unidos se hace más tenso.

Ese mecanismo de *quid pro quo* –Moscú mete el dedo en el ‘patio trasero’ de EEUU cuando los estadounidenses lo hacen en el ‘extranjero próximo’ ruso– tiene su piedra de

toque en el alineamiento de Cuba. Si en la temprana y en la tardía Guerra Fría, Cuba y Nicaragua, respectivamente, se significaron como peones soviéticos, en lo que llevamos de siglo XXI también Venezuela se ha sumado a la constelación estratégica rusa. Sin embargo, en la presente crisis por la invasión de Ucrania, Nicolás Maduro ha evitado abrazar en exceso a Vladimir Putin por la perspectiva de que Washington llegue a eliminar o rebajar las sanciones al petróleo venezolano ante las necesidades de suministro derivadas del boicot a los hidrocarburos siberianos. Sin posibilidad de un trueque similar, y por tanto sin señales positivas desde la Casa Blanca, La Habana ha vuelto a su vieja táctica de cerrar filas con Rusia, país que le ha ayudado financieramente en 2021 para salir de la crisis pandémica. La nueva amenaza de Moscú de contar con bases militares en Cuba, Nicaragua y Venezuela, en cualquier caso, posiblemente quedará como mera

advertencia dialéctica, tal como ocurrió en 2014 a raíz de la crisis de Crimea.

Si bien el largo confinamiento decretado por los países para hacer frente a los contagios de Covid-19 redujo la actividad económica y la movilidad social, en lo que se refiere al narcotráfico no supuso el parón que hubiera cabido esperar. Un ejemplo de esto ha sido un nuevo pico en el número de muertes por sobredosis de droga en Estados Unidos, propiciada por el incremento de consumo de fentanilo y otros opioides sintéticos. Entre 2017 y 2019 se había moderado la tendencia, y a partir de ese año China aumentó los controles sobre el flujo ilícito de esas sustancias al mercado estadounidense; sin embargo, las redes chinas han pasado a exportar a México y ahora son los carteles mexicanos los que más incidencia tienen en la llegada de opioides a EEUU (cultivan menos amapola, pero se han volcado a procesos de producción sintética).

La pandemia acentuó muchos problemas de las sociedades latinoamericanas y puso a sus gobiernos en serias dificultades financieras, además de políticas. Ese cóctel, agravado con ingredientes autóctonos, fue explosivo en el caso de Haití, donde, a prolongadas protestas callejeras por la permanencia en el poder del presidente Jovenel Moïse, siguió en julio de 2021 el asesinato del propio mandatario. Aún siguen sin esclarecerse las principales claves del magnicidio, que pareció obedecer a un laberinto de luchas de poder y negocios ilícitos. Fue ejecutado por un comando de mercenarios de origen colombianos, contratados a través de una empresa de seguridad de Florida, y muy probablemente financiados por ciertos operadores políticos haitianos, rivales abiertamente o en secreto de Moïse.

La inestabilidad política haitiana, que significó un fortalecimiento de bandas delictivas locales y un mayor incentivo para la emigración, ya llevó al presidente de la vecina República Dominicana a anunciar en febrero de 2021 la construcción de un muro en la frontera que separa a los dos países que se reparten la isla de La Española. La construcción empezó a comienzos de 2022, con el propósito de levantar una verja de cuatro metros de altura, sobre una base de hormigón, en un recorrido de 160

kilómetros, la mitad de la extensión fronteriza total. El principal propósito, no siempre admitido, es reducir la inmigración ilegal (los haitianos constituyen alrededor del 10% de la población en la República Dominicana). En Santo Domingo los partidos políticos están en general a favor de la iniciativa; grupos de derechos humanos y también algunos empresarios (la mano de obra haitiana es fundamental en la construcción y la agricultura dominicana) han mostrado sus objeciones, advirtiendo que el contrabando no se detendrá y que el muro también puede alimentar la corrupción entre quienes se encarguen de vigilarlo.

La seguridad fronteriza ha tenido en el último año un especial protagonismo en los límites entre Venezuela y Colombia. Desde hace tiempo una frontera caliente, en marzo de 2021 se vivió un salto cualitativo: hasta entonces la presencia de guerrillas colombianas en suelo venezolano había sido tolerada e incluso fomentada por el chavismo; sin embargo, la creciente pelea entre facciones de las exFARC (y de estas con el ELN) llevó a la intervención del Ejército de Venezuela en ‘ayuda’ de uno de los bandos. Esa acción venía a instalar el ‘conflicto armado’ en Venezuela, con decenas de muertos (16 militares), miles de desplazados, posiblemente ‘falsos positivos’ y una inseguridad permanente. Esos enfrentamientos entre facciones supusieron la muerte a lo largo de 2021 de tres de los cuatro principales dirigentes de la llamada Segunda Marquetalia (el grupo principalmente defendido por Caracas). Al mismo tiempo, esos grupos guerrilleros son cada vez más binacionales.

La violencia que afecta a poblaciones de origen indígena también alcanzó a Chile, país que conoció un salto en conflicto mapuche a partir de octubre de 2021: grupos extremistas llamaron a la lucha armada y el Gobierno de Piñera respondió con un estado de excepción prolongado. Hasta marzo de 2022, en que tomó posesión el nuevo presidente, el Ejército estuvo desplegado en las regiones de Bío-Bío y La Araucanía, a unos 600 kilómetros al sur de Santiago. La asunción del poder por parte de Gabriel Boric no ha supuesto de momento una pausa del conflicto. Boric prometió a su llegada la apertura de un diálogo y la inclusión en la

nueva Constitución de reconocimiento y derechos para el pueblo mapuche, pero las radicales han seguido en armas.

Esos problemas internos no han consumido, lógicamente, todos los esfuerzos de Chile, que en el ámbito de la seguridad ha estado impulsando en el último año dos proyectos de conexión intercontinental por cable submarino de fibra óptica. La posibilidad de interrupciones por ataques cibernéticos aconseja a los países a reducir su dependencia de una única conexión y a diversificar sus puntos de enlace. El Cable Humboldt, que debe conectar por primera vez Sudamérica y Asia, unirá Chile con Australia, tras descartar la idea original de conectar directamente con China. El otro proyecto es un cable a la Antártida, uniendo primero la

población argentina de Ushuaia y la chilena de Puerto Williams, a ambas orillas del Canal de Beagle, y luego yendo a la isla antártica de Rey Jorge.

Estas iniciativas se desarrollan en colaboración con Argentina, mostrando una cooperación entre dos vecinos no siempre bien avenidos, tal como ha venido ocurriendo desde hace treinta años entre Argentina y Brasil en materia nuclear. En julio de 2021 se celebró el trigésimo aniversario del acuerdo entre los dos mayores países de Sudamérica que permitió el desarrollo de la energía nuclear sin los recelos mutuos que habían despertado programas secretos previos que pretendían desarrollar la bomba atómica. ●



Cuba vuelve a priorizar a Rusia ante la guerra en Ucrania y la falta de señales positivas de EEUU

Moscú habla de nuevo de bases militares en Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero Maduro no ha cerrado del todo filas con Putin por los contactos con Washington

° *Putin ha reestructurado la deuda cubana de 2.300 millones de dólares y promovido el turismo a la isla en 2021 tras el colapso de visitantes internacionales de 2020.*

° *Tras las protestas de julio de 2021, el gobierno ruso incrementó el envío de donativos a la isla, incluyendo alimentos; también mandó ayuda médica durante la pandemia.*

° *En la anterior crisis ucraniana de 2014, el Kremlin ya advirtió de posible presencia militar permanente rusa en el Caribe, pero luego no acabó ejecutando esa amenaza.*

MARÍA VICTORIA ANDARCIA

Vladimir Putin acompañó sus preparativos de guerra en Ucrania con un estrechamiento de los contactos con los países latinoamericanos habitualmente alineados con Moscú: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero además de ese interés por el Caribe americano –la amenaza a actuar en el ‘patio trasero’ estadounidense, sería la moneda de cambio del Kremlin frente a un Occidente que actúa en el ‘extranjero próximo’ ruso–, Putin también cuidó su relación con los dos mayores países sudamericanos, Brasil y Argentina, a cuyos mandatarios recibió afectuosamente, sin la distancia física a la que sometió a los líderes europeos.

Esos contactos prebélicos venían a reforzar la vinculación que Rusia y Cuba habían intensificado en el último año. El mayor fuelle económico y comercial de China en su relación con Cuba había dejado en un segundo plano la tradicional hermandad ruso-cubana, pero ahora esta ha vuelto a cierto protagonismo. Con la guerra en marcha, esa ‘relación especial’ es la manera que tiene Moscú de generar molestias a EEUU a escasas millas de su costa, mientras que para La Habana constituye una reacción de desaire hacia Washington por no buscar una aproximación que, a cambio de que se separase de Putin, la isla obtenga el beneficio de una reducción de las sanciones norteamericanas. Este

último mecanismo se ha producido en los tratos entre Washington y Caracas, por la cuestión petrolera, pero en este momento Cuba no tiene nada atractivo que ofrecer a la Administración Biden.

Ronda de contactos rusa

En pleno escalamiento de la crisis de Ucrania en enero, Vladimir Putin sostuvo una conversación telefónica con su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, en la que abordaron la cooperación estratégica entre ambos países en materia de comercio e inversiones. De acuerdo con el comunicado del Kremlin, los mandatarios debatieron “cuestiones relativas a una mayor coordinación de las acciones de los dos países en el ámbito internacional de acuerdo con los principios de la cooperación estratégica y las tradiciones de amistad y entendimiento mutuo”.

La llamada se llevó a cabo pocos días después de que el viceministro de Exteriores ruso, Serguei Ryabkov, advirtiese que Moscú no descarta ni confirma una posible presencia militar en Cuba y Venezuela si aumentasen las tensiones con Estados Unidos. Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional estadounidense, afirmó que Estados Unidos respondería de forma decisiva si Rusia avanzaba en esa dirección. En su opinión, el comentario del viceministro ruso podría tratarse de una “fanfarronada”, que no debe tomarse demasiado en serio. De hecho, ya



Captura de la cuenta de Twitter de la Presidencia de Cuba

en la anterior crisis ucraniana de 2014, Moscú también habló de la posibilidad de abrir bases militares en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y eso no sucedió.

Putin ha aprovechado los lazos establecidos en la era soviética y los resentimientos locales hacia Estados Unidos para desplegar una campaña de influencia en América Latina. En este sentido, también habló con los jefes de Estado de Venezuela y Nicaragua, quienes le ratificaron su apoyo con respecto a la posición asumida frente a Ucrania. La Duma (cámara baja del Parlamento de Rusia) anunció que Cuba reconocía como independientes a las autoproclamadas repúblicas de Luhansk y Donetsk, aún cuando hasta el momento el gobierno cubano no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

Pocos días antes del ataque a Ucrania el primer viceministro ruso, Yuri Borisov, realizó un viaje a Venezuela, Nicaragua y Cuba para ahondar en los temas discutidos en las conversaciones telefónicas sostenidas en enero entre Putin y los mandatarios latinoamericanos. Las visitas se realizaron con el fin de continuar los intercambios intergubernamentales con esos países sobre cooperación comercial y económica.

Durante estos encuentros con los líderes cubanos, éstos mostraron su solidaridad ante lo que llamaron “constantes campañas de desinformación y guerra propagandística” desarrolladas por Estados Unidos contra Rusia.

La gira de Borisov sugería que Moscú estaba cortejando a la región mientras que aumentaban las tensiones por la invasión rusa a Ucrania. El 23 de febrero, el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, comenzó su propia visita oficial a Cuba. En el encuentro entre Volodin y Díaz-Canel, el mandatario cubano destacó el excelente estado de las relaciones entre Cuba y Rusia, al tiempo que reiteró la voluntad de consolidar el diálogo político y los intercambios en sectores comunes.

Por su parte, Jair Bolsonaro y Alberto Fernández, mandatarios de Brasil y Argentina, respectivamente, destacaron sus buenas relaciones con el Kremlin los primeros días de febrero, aunque ahora

intentan mantenerse relativamente neutrales por lo mal que habían quedado ante el repudio internacional contra Rusia. El presidente brasileño fue recibido en Moscú por Putin sólo ocho días antes de la invasión rusa de Ucrania y desde entonces ha evitado condenar de forma clara la acción rusa. Tanto Brasil como Argentina —además de México y también El Salvador de Bukeke— han mostrado una actitud titubeante en las votaciones desarrolladas en Naciones Unidas y en la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la guerra.

Alianza estratégica ruso-cubana

Apenas un día antes de la visita de Volodin a la Habana, la Duma anunció la reestructuración de la deuda de Cuba de 2.300 millones de dólares que Cuba mantiene con Rusia. El acuerdo prorroga hasta 2027 el pago de los créditos que Rusia otorgó a Cuba entre 2006 y 2019 para financiar proyectos en las esferas de la energía, la industria metalúrgica y el transporte, así como para el suministro de mercancías necesarias para el desarrollo de la economía de la isla. Debido a la crisis económica que atraviesa, Cuba dejó de girar pagos desde inicios de 2020. En 2014, Moscú condonó el 90% de la deuda contraída

por la isla, valorada en 35.300 millones de dólares.

El turismo, una de las principales fuentes de ingreso de la economía cubana, se ha visto casi paralizado por la pandemia. En ese contexto de dificultades, Rusia ha sido uno de los principales emisores de turistas a la isla. Según cifras de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el turismo ruso aumentó un 97% en 2021 respecto al 2020.

Hasta ahora Cuba ha continuado recibiendo ayuda humanitaria de Rusia para hacer frente a la pandemia Covid-19 como parte del vínculo de solidaridad y cooperación entre las dos naciones. El último cargamento que llegó a la Habana en enero llevaba cerca de 20 toneladas de insumos médicos como trajes de protección multiusos y jeringuillas. Esta era la quinta carga procedente de Rusia desde diciembre. Tras las protestas del pasado 11 de julio de 2021, el gobierno ruso incrementó el envío de donativos a la isla, incluyendo alimentos.

Si bien Rusia es uno de los socios históricos de Cuba, las importaciones que la isla hizo desde Rusia en 2019 solo fueron un 5,39% del total de compras cubanas en el exterior, por lo cual no llega a ser el socio más importante de la Habana. Por encima de Rusia se encuentra China, de donde provienen el 15% de las importaciones que realiza la isla. Las relaciones con Rusia son de menor ambición económica que las mantenidas por Cuba con China, pero siguen siendo importantes. Rusia se sitúa entre los cinco países con mayores exportaciones a la isla. En el plano político, las relaciones con Rusia tienen un alto grado de interés. La presencia rusa en La Habana y el resto de los países de la región es una prioridad para Putin ya que intenta contrarrestar el poder estadounidense en su ‘patio trasero’.

En ese contexto llama la atención el contorsionismo realizado por Venezuela en la presente crisis internacional. Pese a los estrechos lazos que tradicionalmente han unido al gobierno de Putin y al de Maduro, el mandatario venezolano se ha visto en un dilema: seguir abrazado a Rusia o abrirse a las señales de compromiso enviadas por Estados Unidos. Con la guerra de Ucrania en curso y el consecuente aumento del precio de los carburantes y las materias primas, EEUU intenta explorar una nueva etapa con América Latina con el objetivo de debilitar la influencia de Rusia en la región. La reducción de compras de hidrocarburos a Rusia por parte de Occidente obliga a buscar suministradores alternativos, y Venezuela podría ser uno de ellos en el caso de que EEUU suavice o elimine las sanciones que impone a la petrolera PDVSA. Emisarios de Biden se reunieron con Maduro en Caracas a comienzos de marzo.

En medio de esas gestiones, Venezuela ha preferido ausentarse de reuniones en organizaciones internacionales en determinadas votaciones para no tener que refrendar públicamente la guerra de Putin. A diferencia del reconocimiento hecho por Venezuela de las repúblicas pro-rusas unilateralmente separadas de Georgia, esta vez Caracas no procedió a reconocer la independencia de las dos repúblicas del Donbás, como sí ha hecho Nicaragua (Cuba no dio ese paso en relación con Georgia y tampoco lo ha dado oficialmente ahora).

Washington aún no ha mostrado con determinación el camino que seguirá en relación con el diálogo con Venezuela, pues es algo políticamente controvertido en EEUU. Similar aproximación, sin embargo, no la ha seguido con Cuba, lo que no deja a La Habana con más opción táctica que la de seguir al lado del Kremlin. ●

El aumento de fentanilo de México contribuye al récord sobredosis en EEUU durante la pandemia

La menor llegada desde China de opioides sintéticos, por un mayor control acordado con Washington, desvía el flujo a través de los carteles mexicanos

° En México el cultivo de amapola y la producción de heroína han caído, pero desde 2019 ha aumentado la generación de fentanilo, según la DEA estadounidense.

° Después de que entre 2017 y 2019 se suavizara la grave crisis de sobredosis en EEUU, a comienzos de 2021 se dio un nuevo récord de muertes registradas en el último año.

° Los carteles están elaborando una heroína más pura y poderosa, antes solo disponible en Asia, y su mezcla con productos sintéticos puede derivar en fatales sobredosis.

ANTHONY MAGHARIKI

Contra lo que podía pensarse, la reducción de la actividad y de los contactos personales durante la pandemia de Covid-19 no ha supuesto una generalizada disminución de las cifras relacionadas con el narcotráfico y el abuso de drogas. En 2020, el número de muertes por sobredosis en EEUU incluso aumentó, alcanzando casi los 100.000 decesos, y se prevé que en 2021 ese récord se haya superado. La grave crisis de los opiáceos en ese país se había suavizado entre 2017 y 2019, pero desde entonces ha vuelto a acentuarse. En esas muertes tiene una especial incidencia el fentanilo, en gran parte procedente de México, donde su producción está en alza.

Si bien la producción de heroína en México, de donde llega el 92% de la que ingresa en el mercado estadounidense, ha decrecido los últimos años, la apuesta de los carteles mexicanos por el fentanilo y otros opioides sintéticos ha abastecido el consumo en EEUU. Esos productos con administrados en muchas ocasiones mezclados con heroína y otras drogas para reforzar sus efectos.

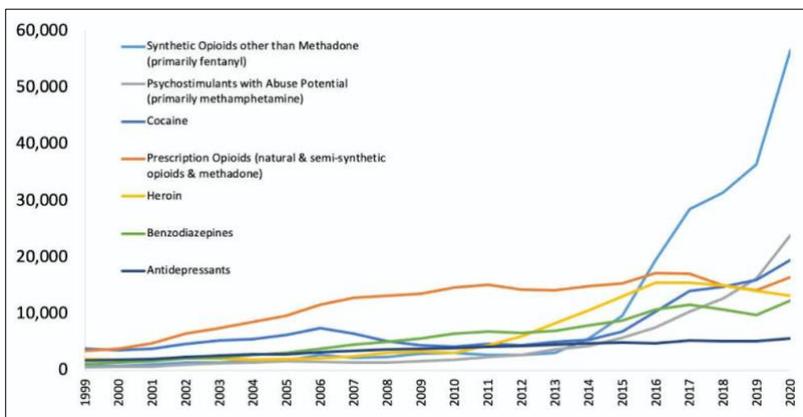
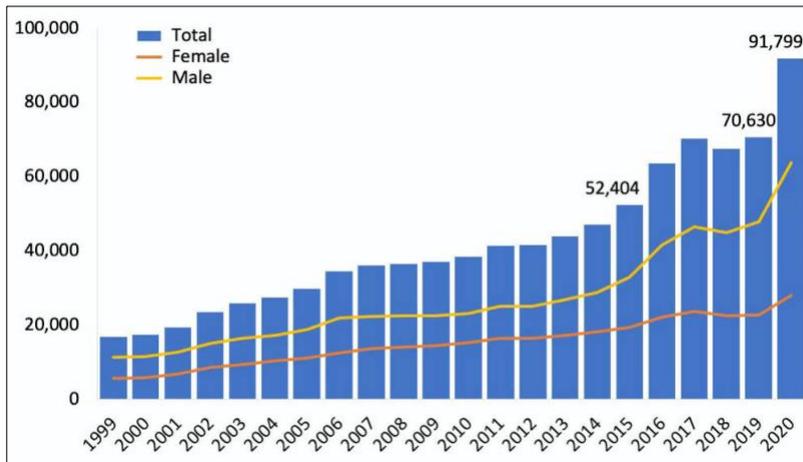
De acuerdo con el último informe anual publicado por la DEA, las hectáreas de cultivo de amapola en México habían descendido en 2019 a 30.400, un descenso del 27% respecto a las 41.800 estimadas de 2018; la correspondiente producción de heroína pura habría caído en una

proporción similar, de las 106 toneladas de 2018 a las 78 toneladas de 2019. Sin embargo, como también señala la agencia antinarcóticos estadounidense, “desde al menos 2019 el suministro de fentanilo desde México ha aumentado”, compensando la reducción del flujo del que llegaba directamente desde China, que ha disminuido “sustancialmente” tras acuerdos alcanzados entre Washington y China para mayores inspecciones en los fletes comerciales. Con todo, desde China llegan a México precursores, e incluso pre-precursores, que los carteles mexicanos utilizan para elaborar el fentanilo y otras drogas sintéticas y luego introducirlas en EEUU. También desde India proceden esos suministros.

La DEA constata que las organizaciones de crimen transnacional mexicanas están “significativamente implicadas” en la producción de fentanilo, especialmente los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Es “casi seguro”, advierte, que los carteles mexicanos “tendrán el mayor impacto directo en el mercado de fentanilo de EEUU en el cercano futuro, debido al incremento de capacidad y competencia en la producción de fentanilo, a la adaptación a las restricciones en precursores químicos y a las infraestructuras de narcotráfico existentes en EEUU”.

Eso se ha traducido en un alza de las muertes por sobredosis. Hace un año, en abril de 2021, las muertes por consumo de droga en EEUU

Muertes por sobredosis en EEUU, 1999-2020



Gráficas tomadas de National Institute on Drug Abuse de EEUU

habían llegado por primera a las 100.000 en un periodo de doce meses. A lo largo de 2020, la cifra fue de 91.799, según la agencia Centros para el Control y Prevención de la Enfermedad (CDC); en la primera mitad de 2021 se alcanzaban ya las 53.000, con la previsión de que se estableciera un nuevo récord cuando se contabilicen las cifras consolidadas de todo el año.

En 2020, las muertes en EEUU debidas a un opioide sintético, principalmente el fentanilo, fueron 56.516. Hasta el momento, más de 538.000 personas han muerto desde 1999 en ese país por sobredosis de opioides. Una investigación en 'The Lancet' considera que si no se toman medidas significativas, EEUU y Canadá podrían registrar más de 1,2 millones de muertes relacionadas con los opioides.

Además de la devastadora pérdida de vidas, esta epidemia ha demostrado ser una enorme carga financiera para el gobierno estadounidense. Las estimaciones de las autoridades

estadounidenses situaron el costo en 1.020 millones de dólares en 2017, teniendo en cuenta las pérdidas en productividad y el precio de la atención médica. Washington ha intensificado sus esfuerzos para superar esta emergencia social. A fines de 2021, el Departamento de Justicia otorgó más de 300 millones de dólares para combatir la crisis de opioides y estimulantes y para abordar los trastornos por uso de sustancias.

Amapola en México

México ha sido una fuente importante de heroína para Estados Unidos desde la década de 1940. El cultivo de amapola en México comenzó ya antes de la Segunda Guerra Mundial en México, pero fue durante el conflicto cuando se incrementó debido a las necesidades de opioides medicinales de EEUU.

Después de la guerra, cuando cayó esa demanda específica de los hospitales estadounidenses, el cultivo de amapola se desvió hacia a la fabricación de heroína, lo que alimentó el mercado criminal de drogas en EEUU. Alcanzó su punto máximo en la década de 1970 antes de caer debido a las campañas de erradicación de la amapola en México y, más significativamente, a un aumento generalizado en el uso de cocaína en los EEUU.

Sin embargo, en 2009 la producción de amapola se disparó debido a una variedad de causas. Primero, los cultivadores de amapola colombianos que producían heroína para el mercado estadounidense cambiaron de cultivo en los años iniciales del nuevo siglo. En segundo lugar, los productores mexicanos de cannabis perdieron participación de mercado debido al cultivo legal de cannabis en EEUU, dejándolos sin una clara fuente de ingresos. En tercer lugar, y lo más crítico, en EEUU se dio una prescripción excesiva de opioides, en muchas

ocasiones bajo mano, y una mala conducta de las compañías farmacéuticas. Como resultado, los carteles mexicanos incrementaron primero la producción de heroína y luego reforzaron la de fentanilo.

El cultivo ilícito de estupefacientes emplea en México posiblemente a decenas de miles de personas. El cultivo de amapola es, de hecho, uno de los negocios ilegales más intensivos en mano de obra, lo que permite a los carteles amasar un capital político significativo. La economía de la droga representa un componente significativo de la economía local en las principales zonas de producción de amapola, donde los medios de vida alternativos son escasos y la presencia del Estado es relativa. Los carteles controlan el territorio y funcionan como

árbitros de conflictos, proveedores de bienes públicos y modeladores de las posibilidades económicas locales. Las áreas de cultivo de amapola se encuentran entre las más peligrosas de México, con una gran cantidad de organizaciones de narcotráfico, muchas de ellas pequeñas, pero de gran violencia.

En los últimos diez años, los cárteles mexicanos han perfeccionado el cultivo de opio y han producido heroína blanca, una versión más pura y poderosa que antes solo estaba disponible en Asia. La heroína blanca primero llegó a la costa Este de EEUU, reemplazando la oferta colombiana, y luego se ha expandido también a la costa Oeste. Se trata de una sustancia más fácil de mezclar con el fentanilo, considerablemente más poderoso y letal. ●

El ‘conflicto armado’ se instala en Venezuela de la mano de las guerrillas colombianas

El choque de facciones y la ‘ayuda’ del Ejército de Maduro dejan decenas de muertos, miles de desplazados, ‘falsos positivos’ y una inseguridad permanente

° En marzo de 2021 se produjo el primer enfrentamiento de calibre en Apure, con 16 bajas del Ejército; desde entonces la confrontación entre grupos se ha extendido a 2022.

° La Segunda Marquetalia ha quedado debilitada tras el asesinato de sus principales líderes en 2021, salvo 'Iván Márquez' que supuestamente se ha refugiado en Cuba.

° Unos 1.900 efectivos, del total estimado de 7.650 componentes de las guerrillas colombianas, operan en suelo venezolano, donde también realizan nuevos reclutamientos.

EMILI J. BLASCO

La frontera entre Colombia y Venezuela ha sufrido en el último año un importante incremento de tensión. No solo ha habido fuertes enfrentamientos entre guerrillas colombianas rivales por el control de territorios que facilitan sus negocios ilícitos, sino que el propio Ejército venezolano se ha visto envuelto en las disputas; con ello el ‘conflicto armado’ se ha instalado en la sociedad venezolana, al menos en esas zonas fronterizas, con decenas de muertos, miles de desplazados y una inseguridad permanente.

La constricción del espacio controlado por los grupos guerrilleros en Colombia, a raíz de los acuerdos de paz de 2016 que supusieron el desmantelamiento de las estructuras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), llevó a una mayor presencia de esos grupos criminales en Venezuela, con reclutamiento de jóvenes venezolanos y deviniendo en grupos binacionales, si bien sus dirigentes siguen siendo colombianos. El jefe militar de Colombia, general Luis Fernando Navarro Jiménez, afirmó a finales de septiembre de 2021 que unos 1.900 efectivos de los grupos colombianos operan en Venezuela, lo que supone alrededor del 25% de su fuerza conjunta, estimada en 7.650 personas.

La presencia de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el lado

venezolano de la frontera ya fue autorizado por el presidente Hugo Chávez, pero entonces esos espacios eran meros ‘santuarios’ (lugares de descanso y seguridad, fuera del alcance del Estado colombiano). Con el tiempo, esa presencia residual se fue transformando en dominio de municipios que el ELN o grupos disidentes de las FARC incorporaban a su base territorial delictiva, para la producción o traslado de droga, la extracción de minerales y el contrabando de gasolina y otros rubros. Su actividad en Venezuela se registra no solo en estados fronterizos (Zulia, Táchira, Apure y Amazonas), más relacionada con el contrabando y el narcotráfico, sino también en el estado Bolívar, en cuyo escudo guayanés se encuentran las mayores riquezas minerales de ese vecino país, que dan pie a una intensiva minería ilegal para la extracción de oro, con especial presión sobre las poblaciones indígenas.

Enfrentamientos

El anuncio desde suelo venezolano, en agosto de 2019, de la creación de la llamada Segunda Marquetalia –liderada por ‘Iván Márquez’, quien volvía a las armas después de haber aceptado inicialmente el acuerdo de paz, en cuya negociación había participado–, desequilibró las fuerzas entre los pequeños grupos de las exFARC. (conocidos también como ex-FARC Mafia y Post FARC-EP). El grupo de Márquez

no solo ganaba protagonismo frente al liderado por ‘Gentil Duarte’, quien nunca llegó a desmovilizarse, sino que además contaba con el favor del gobierno de Nicolás Maduro. La intervención del Ejército venezolano en la disputa entre ambas facciones provocó un salto en la violencia, al tiempo que la humillación sufrida al quedar en evidencia su escasa eficiencia operacional desprestigió aún más a la propia institución castrense.

En marzo de 2021, el Ejército y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) atacaron en la población de La Victoria (estado venezolano de Apure) un campamento al mando Ferley González, encuadrado en el Frente 10 de ‘Gentil Duarte’. Era una operación para sacar a esa facción de un territorio en disputa con la Segunda Marquetalia (o para favorecer al ELN, también en buena sintonía con Maduro). El contraataque del Frente 10, así como los bombardeos del Ejército y los registros violentos llevados a cabo por las FAES, forzaron a unas 4.000 personas a abandonar sus tierras. El Gobierno venezolano dijo haber “neutralizado” a cinco “terroristas” (algunas organizaciones hablaron de “falsos positivos”), pero sufrió 16 bajas, entre ellas varios oficiales, y el secuestro de ocho soldados.

La negativa experiencia hizo que el Ejército evitara implicarse de nuevo de esa forma, dejando espacio a una confrontación directa entre las guerrillas. En mayo de 2021 murió ‘Jesús Santrich’, de la Segunda Marquetalia, en circunstancias no esclarecidas, aunque todo apunta a un enfrentamiento entre facciones. Lo mismo ocurrió con los también líderes de ese grupo ‘El Paisa’ y ‘Romaña’, muertos en diciembre. De los máximos dirigentes de la



Gráficos tomados del informe de septiembre de 2021 de Indepaz

Segunda Marquetalia solo quedó ‘Iván Márquez’, quien supuestamente se habría refugiado en Cuba al considerar que Venezuela, al menos de momento, ya no es un lugar seguro para él. Esto ha dejado a la Segunda Marquetalia –incluida por EEUU en 2021, junto a los otros grupos disidentes de las FARC, en su lista de organizaciones terroristas– sin fuelle para un crecimiento, dificultando su deseo de erigirse en heredero ideológico de las FARC y diferenciarse así de las otras facciones, cuyo perfil responde

netamente a organizaciones de crimen organizado.

El debilitamiento de ese grupo ha permitido una expansión del Frente 10 y ha dado lugar a la confrontación directa entre este y el ELN. El 30 de diciembre de 2021 murió asesinado ‘El Cherry’ (ELN) y eso dio lugar a dos semanas de combate entre las dos organizaciones en diversos sectores de Apure. Ya entre 2004 y 2010 las FARC y el ELN protagonizaron una guerra en suelo colombiano, con cientos de muertos y desplazados, tras la que establecieron una división de sus zonas de control. Los nuevos enfrentamientos, tanto en Apure como en el colindante departamento colombiano de Arauca, generaron casi 30 muertos.

Efectivos

De acuerdo con los datos más recientes del colombiano Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), publicados en septiembre de 2021, los distintos grupos de las exFARC cuentan con un total de 5.200 efectivos, el doble que los 2.450 del ELN, si bien estos últimos operan como una única organización. De acuerdo con el general Navarro Jiménez, de los efectivos de las exFARC, 700 operarían en Venezuela (13,5%), mientras que del ELN lo harían 1.200 (49%).

A pesar del nutrido número de guerrilleros de las exFARC, en realidad solo una pequeña parte proviene de la vieja organización que dejó las armas. Como precisa Indepaz, de las 13.000 personas que se acogieron al acuerdo de paz, el 95% está cumpliendo con el proceso, y solo el 5% restante (795 personas) no se sumó formalmente a él, si bien se desconoce si se integró o no en las estructuras armadas posteriores. De forma que la mayoría de quienes están hoy encuadradas en ellas son personas reclutadas desde 2016.

El grupo exFARC más numeroso sería el Bloque Suroriental, con el Frente 10 de ‘Gentil Duarte’ como aglutinador de una red de 12 estructuras y 2.700 efectivos. Luego estaría la Segunda Marquetalia, con 10 estructuras y 2.000 miembros, si bien la muerte de varios de sus máximos líderes posiblemente ha debilitado al grupo. Sin conexión territorial con Venezuela y operando con el foco en el Pacífico colombiano estaría el Comando Coordinador de Occidente, con 8 estructuras y 500 efectivos.

Como evalúa Indepaz, no es comparable la situación actual con la de las FARC antes del proceso de paz: “hoy son tres grupos independientes desarticulados –como las astillas de un gran tronco– que hasta ahora no representan un proyecto insurgente y tampoco un escenario de guerra como antes del acuerdo de paz. Lo que se da hoy son conflictos focalizados de menor intensidad”. Sus acciones se concentran, por lo que se refiere a Colombia, en 14 departamentos y 74 municipios (frente a la presencia sostenida en 31 departamentos y 249 municipios en 2011, antes del acuerdo de paz).

Por lo que afecta al ELN, este está organizado en 8 frentes, formados por 2.450 personas, número que ha crecido en los últimos años por la desmovilización de las FARC y el nuevo reclutamiento también en zonas de Venezuela (proceso que también han seguido parte de las exFARC). El incremento de efectivos y de áreas de movilidad, sin embargo, “no implica un incremento proporcional de capacidad militar o de influencia política e ideológica entre la población”, indica Indepaz. Así, en regiones del Pacífico colombiano “a más radio de acción han correspondido mayores disputas armadas con otros grupos; sin embargo, las confrontaciones con el Estado han disminuido”. ●

Magnicidio en Puerto Príncipe, laberinto de luchas de poder y negocios ilícitos

Las claves del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en julio de 2021 siguen sin esclarecerse, pero la investigación apunta a operadores políticos

° *Un comando de 26 personas, en su mayoría mercedarios de origen colombiano con experiencia militar previa en su país, dio muerte al mandatario en el palacio presidencial*

° *El comando fue contratado a una empresa de seguridad de Florida, mientras que parte de las armas habrían sido facilitadas en Haití por quienes tramaron la operación*

° *El vacío de poder, que sigue a una grave crisis institucional del país, ha fortalecido las bandas de delincuentes haitianas, facilitando la unificación de varias de ellas*

LIZNORA CASTAÑEDA

Jovenel Moïse, presidente de Haití, fue asesinado el 7 de julio del 2021 en su residencia de Puerto Príncipe mientras dormía junto a su esposa. Un comando de mercenarios penetró en el edificio hacia la 1 de la madrugada y, aparentemente sin apenas resistencia de la guardia presidencial, logró el acceso al dormitorio donde se encontraba Moïse y su mujer Martine. El mandatario recibió doce disparos, que le causaron la muerte instantánea, mientras que su esposa fue herida con impactos de bala en su brazo derecho. La reacción policial posterior supuso la muerte de varios presuntos atacantes y la captura de otros miembros del comando en las siguientes horas.

A raíz de las investigaciones abiertas, fueron detenidas más de cuarenta personas: 26 al parecer integraban el operativo de asalto, en su mayoría colombianos contratados por su experiencia militar a través de una agencia de seguridad con base en Florida; el resto son haitianos, varios con residencia en EEUU. Las pesquisas apuntan a algunos altos cargos gubernamentales de Haití como urdidores de un complot para acabar con la vida de Moïse.

Nueve meses después del magnicidio sigue sin esclarecerse la trama, con una actuación judicial lenta en Puerto Príncipe, que se desarrolla bajo amenazas anónimas y que ha

llevado a la Justicia de EEUU a tomar algunas decisiones: si bien en Haití aún no se ha procesado a nadie, la Corte del Distrito Sur de Florida ha presentado ya por su parte cargos contra dos presuntos implicados. Uno de ellos señala al actual primer ministro, Ariel Henry, como participante en la conspiración, mientras apunta a Joseph Felix Badio, que ocupaba un alto puesto en materia de lucha contra la corrupción en el Ministerio de Justicia de Haití, como figura central del operativo para asesinar a Moïse. Los motivos de esa acción se pierden de momento en un laberinto de luchas de poder y negocios ilícitos. Por un lado, en Puerto Príncipe existía una aguda confrontación política entre facciones sobre la legitimidad democrática de Moïse; por otro, han circulado versiones sobre el intento de este de enviar a EEUU una lista detallando vínculos con el narcotráfico de algunos individuos, posiblemente de la élite del país, lo que a su vez hablaría tanto de corrupción como de implicación en negocios ilícitos.

Política

El magnicidio se produjo en un contexto de gran inestabilidad socioeconómica y política. Aunque esas circunstancias son tristemente habituales en Haití, en los últimos años el país pasaba por una situación especialmente crítica. La devastación del huracán Matthew en 2016, que se añadía a las consecuencias del destructivo terremoto en



Hombres armados en las inmediaciones de la residencia presidencial de Haití en el momento del ataque del 7 de julio de 2021 [Captura de video]

2010, del cual Haití aún no se ha recuperado completamente, dejó al país en una situación muy precaria para afrontar la pandemia de Covid-19. Ya la nación más pobre del hemisferio occidental, Haití vio aumentada sus condiciones de emergencia.

En cuanto a la política, desde 2019 se sucedieron manifestaciones y desórdenes callejeros de quienes reclamaban la marcha de Moïse. Este ganó la presidencia a finales de 2015, pero las elecciones tuvieron que repetirse un año después. Ese calendario ha marcado la disputa: sus oponentes alegaban que su mandato de cinco años terminaba en febrero de 2021, mientras que él insistía en que concluía en febrero de 2022. Enfrentado con el Consejo Superior de Justicia, pero con el apoyo del Ejército, Moïse siguió en el sillón presidencial, sin convocar elecciones legislativas y gobernando por decreto al disolverse la Asamblea; al mismo tiempo programaba modificar la Constitución introduciendo, entre otras medidas, una cláusula para preservar a los expresidentes de cualquier demanda judicial por corrupción u otros delitos.

El vacío de poder que supuso su asesinato – cubierto durante dos semanas por el primer ministro de Moïse, Claude Joseph, y luego, hasta

que se celebren nuevas elecciones, por un nuevo primer ministro, Ariel Henry– ha fortalecido las bandas delictivas, facilitando la unificación de varias de ellas. La condición de Estado fallido y el poder ganado por facciones criminales ha llevado a etiquetar a Haití como la Somalia de las Américas.

Investigación

La investigación considera que el comando que accedió a la residencia oficial lo formaban 26 personas, en su mayoría mercenarios colombianos, que viajaron a Haití para llevar a cabo la operación; iban acompañados por dos haitianos que vivían en Estados Unidos, contratados como traductores. Todos ellos habrían sido alistados por la empresa Counter Terrorist Unit Federal Academy, con sede en Florida. De los colombianos, al menos trece han sido identificados como antiguos miembros del Ejército de su país. De esa fuerza atacante, tres individuos murieron en enfrentamientos con la policía haitiana, dieciocho resultaron detenidos y están bajo custodia en Puerto Príncipe y cinco se dieron a la fuga.

Entre los colombianos que murieron la madrugada del 7 de julio se encontraban los exmilitares Mauricio Romero y Duberney

Capador. De acuerdo con la esposa del primero, Capador habría reclutado a su marido; posiblemente también reunió al menos a parte del grupo. No obstante, la figura dirigente del comando habría sido Mario Antonio Palacios, quien finalmente fue detenido en Jamaica y puesto a disposición de la Corte del Distrito Sur de Florida, que lo ha procesado. Varios de los implicados alegan que la misión encomendada era detener a Moïse y la cuestión del asesinato se habría desvelado en el último momento.

Aparte del grupo que ejecutó la operación, varios haitianos participaron en la conspiración. Las autoridades de Haití y de EEUU han detenido a algunos de ellos, sin que aún quede abiertamente aclarado el papel de cada uno. Las investigaciones del juez Léon Charles llevaron a la detención de Christian Emmanuel Sanon, un doctor haitiano con residencia en EEUU, y del exsenador John Joël Joseph, apresado en Jamaica y pendiente de extradición. Se presume que Sanon fue quien contrató al grupo de seguridad privada y que viajó a Haití el mes anterior del asesinato en posesión de armas. Joseph también pudo haber facilitado armas y mantener reuniones con otros conspiradores, al igual que Samir Handal, que luego fue detenido en Turquía y de quien también se solicita la extradición.

Un personaje clave en la investigación está resultando el empresario haitiano Rodolphe Jaar;

él y el colombiano Palacios, que comparecen ante el juez de Miami, son las dos únicas personas con cargos hasta la fecha. En sus declaraciones a las autoridades estadounidenses, Jaar se habría declarado cómplice en proveer armas al comando colombiano; también habría indicado que el plan inicial era el secuestro del presidente.

Al parecer Jaar apunta al actual primer ministro, Ariel Henry, como involucrado en los preparativos, mediante contactos, antes y después del asesinato, con Joseph Felix Badio, quien había sido un alto cargo del Ministerio de Justicia en materia de anticorrupción. Badio se dio a la fuga después de que el comando de élite del Ejército haitiano que lo iba arrestar no procediera a hacerlo.

En el caso se dan varios comportamientos extraños de las fuerzas de seguridad haitianas. Algunos medios han reportado el confinamiento de Dimitri Hérard, que era jefe de seguridad de Moïse, ante el hecho de que los guardaespaldas del presidente no presentaron resistencia al ataque; al menos ninguno de ellos fue herido. Además, Badio habría contactado con el jefe de la Policía, Frantz Elbe, que permanece en el cargo, para pedirle la ayuda en la provisión de armas. ●

Santo Domingo levanta un muro para ‘aislarse’ de los problemas de la vecina Haití

La convulsa situación política y económica haitiana hace temer un mayor flujo de inmigrantes, que se acerca al 10% de la población dominicana

° Anunciado en febrero de 2021 por el presidente Abinader, el muro empezó a construirse a comienzos de 2022; es discutible que reduzca el tráfico ilegal

° El proyecto prevé una verja de cuatro metros de altura, sobre una base de hormigón, en un recorrido de 160 kilómetros, la mitad de la frontera entre los dos países

° El muro cuenta con el apoyo general de las fuerzas políticas dominicanas; algunos empresarios prevén dificultad de mano de obra en la agricultura y la construcción

NICOLÁS BRINKMANN

República Dominicana ha reaccionado a los problemas internos recrudecidos en Haití en el último año con la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre ambos países. El proyecto contempla levantar una verja de cuatro metros de altura en un recorrido de 160 kilómetros, cubriendo con ello casi la mitad de los 391 kilómetros de frontera que, de norte a sur, divide la isla de La Española.

La iniciativa del presidente dominicano, Luis Abinader, cuenta con el apoyo de todas las fuerzas políticas parlamentarias, muy sensibilizadas con los problemas de narcotráfico y contrabando y en general asertivos en la defensa de un mayor control de la inmigración ilegal. Haití respeta la decisión de su vecino; desde la ONU se recomienda prestar atención para que no se vulneren los derechos humanos.

La frontera entre Haití y República Dominicana marca un importante desnivel en cuestión de desarrollo económico. Al este de la línea divisoria, los dominicanos contaron con notables tasas de crecimiento del PIB antes de la llegada de la pandemia de Covid-19 (de las mayores en toda Latinoamérica). Aunque su situación social presenta deficiencias, el nivel de progreso es claramente mayor que el de los haitianos, al oeste de la frontera. El PIB per cápita de los primeros en 2021 fue de 8.490

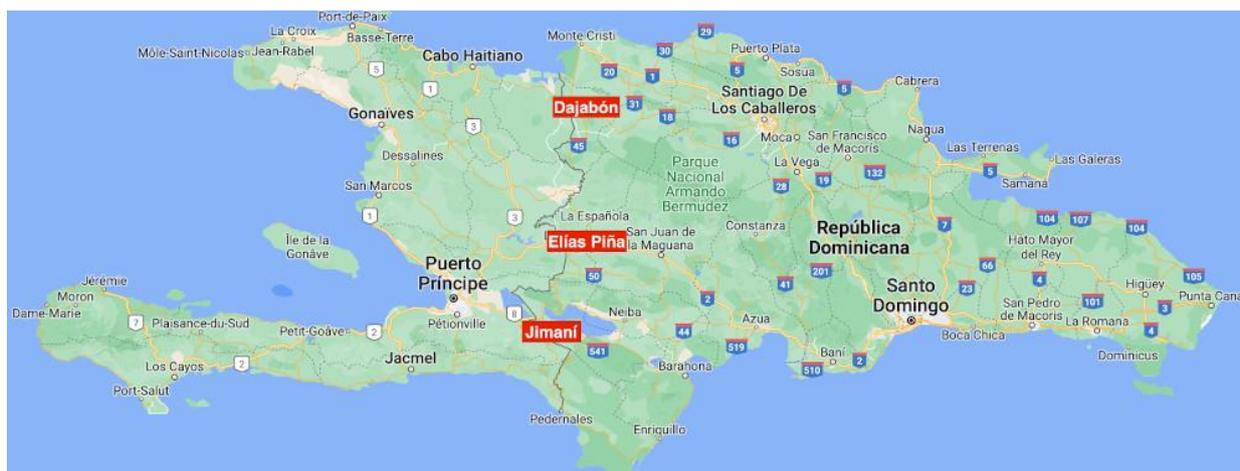
dólares, y el de los segundos, de 1.690 dólares, una cifra cinco veces menor.

Esa diferencia y la nula esperanza en el futuro de Haití, un estado fallido, genera una nutrida migración ilegal. República Dominicana cuenta con un censo de 9,4 millones de habitantes; el número de haitianos en su territorio puede superar el millón de personas. La situación complica aspectos como la seguridad, los derechos laborales o la atención sanitaria.

El muro

Casi un año después de su elección, el presidente Luis Abinader –cuyo gobierno de centroderecha terminó con 16 años de gobiernos de izquierda o centroizquierda– anunció el 27 de febrero de 2021 su intención de hacer construir un muro en la frontera con Haití. Días antes, en el país vecino se había complicado la grave crisis política a raíz de la permanencia en el poder, constitucionalmente cuestionada, del presidente Jovenel Moïse, lo que generó disturbios en Puerto Príncipe promovidos por sus oponentes; esa confrontación política interna haitiana condujo al asesinato de Moïse en julio. La inestabilidad política se producía en un contexto de colapso económico y de la acentuación del flujo migratorio, y dio pie a un mayor poder de las bandas delictivas que operan en el país.

Entre 2019 y 2021 la República Dominicana ya había construido una verja en las



Pasos fronterizos a partir de los cuales se reforzará la frontera con la extensión de un muro [mapa base: Google]

inmediaciones de los pasos fronterizos de Elías Piña y de Jimaní, totalizando 23 kilómetros de valla. El nuevo proyecto pretende mejorar esa infraestructura y levantar un “muro inteligente” a lo largo de 160 kilómetros, incluyendo lo ya construido. El trazado cubrirá sobre todo zonas pobladas, dejando que en otros lugares sea simplemente la orografía la que dificulte la actividad ilegal. En su anuncio, Abinader prometió medidas de seguridad avanzadas, con cámaras y drones de vigilancia, y se dio dos años de plazo para finalizar la obra.

La iniciativa no comenzó a ejecutarse hasta el 20 de febrero de 2022, cuando Abinader presidió la ceremonia de inicio de las obras del muro. Esta tuvo lugar a orillas del río Masacre, en Dajabón, principal puesto fronterizo de la isla, con mayor volumen de tránsito que los otros dos ya mencionados. En el acto participó la cúpula militar, así como representantes de todos los partidos políticos, en una muestra de unidad nacional.

El plan de construcción se desarrollará en dos fases. La primera, cuyos trabajos ocuparán entre siete y nueve meses, según el Gobierno, cubrirá 54 kilómetros. El resto se completará en una segunda fase, que se abordará en el segundo semestre de este año. El presupuesto total de la obra es de 1.750 millones de pesos dominicanos (unos 30 millones de dólares), cifra que no incluye los equipamientos tecnológicos. La sección tipo del muro incluye una base de hormigón y una verja metálica de cuatro metros de altura, coronada por una concertina; está

previsto que la instalación cuente con cámaras de alta definición y rayos infrarrojos.

Inmigración

Abinader ha justificado el muro alegando que permitirá disminuir “drásticamente” la inmigración ilegal, aumentar el control del comercio bilateral y hacer frente en mejores condiciones al narcotráfico, el contrabando de armas y el robo de vehículos. “En un plazo de dos años, queremos poner fin a los graves problemas de inmigración ilegal, narcotráfico y tránsito de vehículos robados que padecemos desde hace años”, ha dicho el presidente dominicano.

En realidad, la frontera entre los dos países no constituye un elemento significativo en el problema del narcotráfico internacional. La droga que pasa por la República Dominicana, fundamentalmente cocaína, llega en embarcaciones y es depositada en puntos de la costa, para que los clanes dominicanos se ocupen de hacerla llegar luego a Estados Unidos. Si bien el contrabando supone ciertamente un aspecto económico a tener en cuenta, es sobre todo la inmigración ilegal (y la violencia asociada de bandas que pueden buscar resguardo en el lado haitiano de la frontera) el principal argumento político y social en favor del muro.

La grave inestabilidad política y la especial incidencia de calamidades naturales en Haití han alimentado un constante flujo migratorio hacia Estados Unidos y también hacia el país vecino, impulsado por las mejores condiciones

económicas y las mayores ventajas asistenciales que este ofrece.

Según datos de la ONU, Haití contaba en 2019 con un total de 1.585.681 de ciudadanos viviendo en el extranjero, lo que suponía el 14,08% de la población. De esos emigrantes, 491.013 (30,97%) se encontraban en República Dominicana. No obstante, las autoridades de Santo Domingo manejan otras cifras, en gran parte porque incluyen a los descendientes nacidos en el país de llegada.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno dominicano por estabilizar el flujo de inmigrantes que llegan del otro lado de la frontera, la población haitiana en República Dominicana sigue aumentando. Las estadísticas oficiales hablan de una presencia en el país de 751.080 residentes de origen haitiano –el 7,3% del total de la población registrada– si bien se estima que, contando con la inmigración ilegal, la cifra supera el millón (el número oficial de habitantes de República Dominicana es de 10,1 millones).

La mayor vigilancia fronteriza ha limitado el crecimiento de la inmigración (aún así en los últimos cinco años los residentes llegados de Haití aumentaron un 8,6%, llegando a ser 497.825), pero se ha acelerado el nacimiento en la República Dominicana de niños de padres haitianos (un incremento del 20,6%, alcanzado los 253.255), de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inmigrantes referida al periodo 2012-2017, que es la última publicada. Según ese estudio, el 88,5% de los extranjeros que viven en República Dominicana son de origen haitiano.

Esta migración ilegal supone una serie de problemas para el país de cogida. En República Dominicana, la tasa de pobreza nacional era en 2020 del 21%: aunque ha descendido progresivamente en los últimos quince años, objetivamente sigue siendo alta, si bien muy por debajo del 60% de la de Haití.

Reacciones

Justamente lo que Abinader reclamó en su último discurso ante la Asamblea Nacional de la ONU,

en septiembre de 2021, fue que haya un esfuerzo internacional para mejorar la situación socioeconómica y política de Haití. Según el presidente dominicano, la comunidad internacional no está actuando suficientemente para revertir el colapso en todos los órdenes en el que se encuentra el vecino país, por lo que pronto la ONU puede encontrarse con una segunda Somalia. En ese discurso justificó la erección del muro, indicando que, si bien República Dominicana está dispuesta a colaborar en lo que esté de su mano, al mismo tiempo debe intentar evitar esos problemas se extiendan al otro lado de la frontera.

Desde septiembre de 2021, el Gobierno dominicano ha incrementado el número de deportaciones de haitianos, dando a las empresas un plazo de 3 meses para la expulsión de empleados irregulares. Estas medidas han afectado especialmente al sector de la agricultura y al de la construcción, donde el 90% de los trabajadores son haitianos.

Esto último ha llevado a algunos empresarios y también a comerciantes, a ver con recelo el muro. También se han producido críticas desde la academia y desde organizaciones defensoras de derechos humanos. Algunas voces apuntan a que la iniciativa favorecerá el crecimiento de las mafias fronterizas, ya que el hecho de que se haga más difícil cruzar ilegalmente la frontera, creará la necesidad de ‘profesionales’ que ayuden a esto; también podrá aumentar la corrupción entre los guardias de frontera, pues la desesperación por cruzar lo hará necesario para migrantes. Igualmente existe el riesgo de que un incremento de la discriminación y los crímenes de odio contra haitianos que ya viven en la República Dominicana.

Estados Unidos, que ha aportado grandes ayudas financieras y materiales a Haití con motivo de desastres naturales y en ocasiones ha tutelado los intentos de recomposición institucional del país, se ha mostrado compresivo con la decisión de Abinader, indicando que cada país ha de tomar las medidas que vea justas para proteger sus fronteras. ●

La violencia mapuche se encona en Chile sin que la llegada de Boric al Gobierno pause el conflicto

En 2021 hubo un salto en la confrontación: grupos extremistas llamaron a la lucha armada y Piñera respondió con un estado de excepción prolongado

° *Entre octubre de 2021 y marzo de 2022 el Ejército ha estado desplegado en la llamada Macrozona Sur, a 600 Km de Santiago, que engloba el área de La Araucanía.*

° *Boric ha prometido diálogo y promueve que la nueva Constitución incluya reconocimiento y derechos para los mapuches, pero los radicales siguen en armas.*

° *El primer gesto del nuevo presidente –enviar a la zona conflictiva a un grupo de ministros encabezados por la titular de Interior–, fue acogido a balazos contra la delegación.*

CAROLINA FERRO

En el último año el conflicto mapuche se ha recrudecido en Chile, con llamamientos a la lucha armada realizados por grupos radicales y el establecimiento y prórroga del estado de excepción en zonas de la Araucanía desde octubre de 2021. El nuevo presidente chileno, Gabriel Boric, se propone marcar un cambio en esa dinámica, si bien organizaciones extremas mapuches advierten de que sus exigencias se mantienen en pie independientemente de quién gobierne en La Moneda.

El conflicto viene de siglo y medio atrás, desde que en 1883 finalizó la incorporación efectiva de la Araucanía al Estado chileno (el pueblo araucano, como entonces era conocido, se movía entre Chile y Argentina debido a que en esa zona de la Patagonia los Andes tienen menos altitud; en suelo argentino también continúa esa presencia cultural, aunque con menor fuerza que en el caso chileno). Desde entonces, la población autóctona de esa región, que se extiende a partir de 600 kilómetros al sur de Santiago, viene reclamando el derecho a sus tierras ancestrales, arrebatadas primero por la administración colonial española y luego, a partir de la independencia del país, en manos de muchos casos de empresas forestales y de hacendados. La expansión de la industria maderera, que explota cerca de 3 millones de hectáreas de

bosques y es responsable del 8% de las exportaciones del país, acentúa además el contraste entre los beneficios empresariales y las exiguas condiciones socioeconómicas de gran parte del pueblo originario de la región. Por lo demás, las reivindicaciones locales plantean también un reconocimiento expreso de los pueblos indígenas en la Constitución.

Unos dos millones de chilenos –el 12% de la población– desciende del pueblo mapuche, si bien muchos no se identifican con esa minoría. La mayor parte de los mapuches viven con tranquilidad sus tradiciones culturales y aunque un buen número aboga por un mayor reconocimiento social y jurídico, solo algunos grupos radicalizados recurren a la violencia.

Etapas

El conflicto cobró relevancia con el regreso de Chile a la democracia tras la dictadura de Pinochet. El cambio político prometía un reconocimiento constitucional y la entrega de tierras a los mapuches. La insatisfacción con el poco avance en esa dirección llevó a grupos mapuches a reaccionar con protestas, ocupación de tierras y ataques. Acciones violentas y no violentas se dieron en cinco etapas. De 1990 a 1997 la actividad de los mapuches se centró en la protesta social y la ocupación de tierras. Entre 1998 y 2002 se dio una transición de la protesta social a la violencia política, por entender sus



En verde, regiones de Bío-Bío y Araucanía, donde el Gobierno aplicó el estado de excepción

impulsores que no estaban consiguiendo sus objetivos. De 2003 a 2007 se redujeron los ataques debido a las mayores medidas de seguridad aplicadas por el Gobierno, pero acciones violentas, como la inutilización de maquinaria y la amenaza física, se convirtieron en métodos usuales por parte organizaciones extremistas. A partir de 2008 se dio un aumento de los ataques, que tuvo como efecto una desmovilización de la causa mapuche; desde 2011 se vive un proceso de radicalización aún mayor, con el incremento del uso de armas de fuego por parte de los grupos de activistas mapuches y una general intensificación del conflicto.

Ese proceso ha llevado a que en el último año se haya dado un salto en la conflictividad. A comienzos de octubre, activistas radicales

mapuches apareciendo por primera vez en un video con armas largas y llamando a la “lucha armada” contra las fuerzas de seguridad que fueran a penetrar en sus tierras (un mensaje repetido un mes después). Por su parte, el Gobierno decretó el 12 de octubre el estado de excepción y envió al Ejército a la llamada Macrozona Sur (a las provincias Arauco y Biobío, de la región Biobío, y a las de Cautín y Malleco, en la región de La Araucanía), en una decisión que la oposición política insistió en criticar.

Tres son los grupos armados mapuches que están detrás del incremento de la violencia: Coordinadora Arauco Malleca (CAM), Weichan Auka Mapu (WAM) y la Resistencia Mapuche Malleco (RMM). Estos grupos han usado ataques terroristas como medio para demandar la entrega de tierras y la autonomía territorial como parte de un proceso de “libre determinación” indígena. Estos grupos realizan acciones contra la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que administra y explota parte de las tierras; por ejemplo, inutilizando maquinaria y robando de madera de esa entidad, en ataques que también llevan a cabo contra otros grandes propietarios. El Estado les acusa de que, con el fin de financiar su causa, esos grupos han establecido lazos con el narcotráfico y con el crimen organizado. Otros residentes de la región se alinean con el Gobierno, afectados por el clima de inseguridad en el que se encuentran.

Medidas

El conflicto forma parte muy fundamental de la política interior de todos los gobiernos. En 1993 se implementó el Fondo de Tierras y Aguas como modo de resolver la disputa, pero ello no colmó las aspiraciones mapuches. En su vuelta a la presidencia, Sebastián Piñera propuso el Plan Impulso Araucanía, con una inversión de más de 8.000 millones de dólares en un plazo de 8 años; en junio de 2021, el 33% de los proyectos del plan ya se habían terminado y otros 51% estaban siendo ejecutados, según el propio Piñera. Si embargo, el conflicto no se redujo, sino que se pasó al estado de excepción decretado en octubre y luego prorrogado por el Congreso hasta el 11 de marzo de 2022, cuando ya fue efectivo el cambio presidencial.

El Gobierno de Piñera justificó entonces la medida asegurando que en lo que iba de 2021 se habían cometido unos 1.500 actos de violencia en la Macrozona Sur, lo que suponía un incremento del 46% respecto a 2020, y se habían detenido 460 personas, lo que representaba algo más de la mitad de todas las detenciones realizadas en los últimos cuatro años en relación con este conflicto.

La llegada de Gabriel Boric a La Moneda, con una promesa de diálogo y comprensión hacia ciertas reivindicaciones mapuches, no ha significado de momento una tregua en la violencia. Boric se propuso dialogar “con todos los que estén disponibles para llevar el camino de la paz” y consideró contraproducente el

estado de excepción aplicado por su antecesor. También dijo comprometerse a que los derechos de los pueblos originarios queden reconocidos y protegidos en la nueva Constitución que se está redactando. Por su parte, los grupos radicales respondieron que no van a tratar de forma blanda al nuevo Gobierno por el hecho de que sea de izquierda. En un comunicado, la CAM advirtió a la “nueva izquierda, hippie, progre y buena onda” gubernamental que el pueblo mapuche no renunciará a su propio ordenamiento político-militar. De hecho, el grupo de ministros enviados por Boric a la Araucanía, encabezados por la ministra del Interior, Izkiá Siches, fue recibido a balazos. ●

Chile impulsa la conexión por cable submarino con la Antártida y con Asia

El proyecto de conexión a través del pasaje de Drake cuenta con la colaboración inicial de Argentina y en el del dirigido a Asia se incorpora también Brasil

° *El cable a la Antártida conectaría la población argentina de Ushuaia y la chilena de Puerto Williams, a ambas orillas del Canal de Beagle; luego iría a la isla antártica Rey Jorge.*

° *El Cable Humboldt, que debe conectar por primera vez Sudamérica y Asia, unirá Chile con Australia, tras descartar la idea original de conectar directamente con China.*

° *Chile ha debido abrir sus planes a los vecinos regionales para completar la financiación, pero mantiene la influyente posición de ser el punto final de salida o llegada del tendido.*

RUT NOBOA

La En un contexto de tensión geopolítica mundial y de especial riesgo en el ámbito de la ciberseguridad, las conexiones intercontinentales a través de cable submarino concentran una especial atención. En el último año, Chile ha seguido con sus gestiones para tender un cable de fibra óptica que una el continente americano con la Antártida y otro que cruce el Pacífico desde Sudamérica. El primero tiene que ver con las ambiciones chilenas en relación al casquete polar antártico y el segundo con la apuesta por una mayor relación con Asia. Ambos proyectos tienen un componente regional, con la colaboración según el caso de Argentina y Brasil; mientras que la conexión transpacífica opta por la cooperación con Australia y Nueva Zelanda en lugar del más comprometido enlace con China.

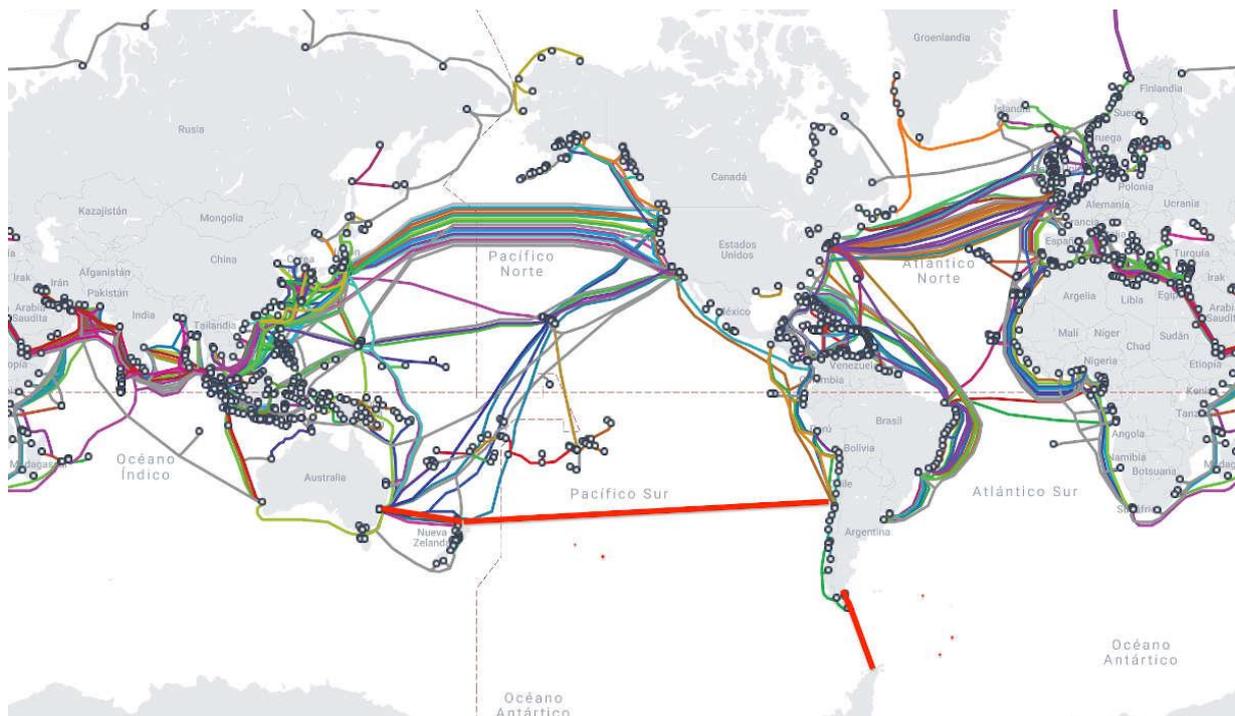
Conexión con la Antártida

El deseo chileno de conexión por cable con la Antártida se explica por el histórico esfuerzo de Chile de tener algún tipo de presencia continuada en ese continente helado que avale sus reclamaciones –congeladas debido al Tratado Antártico que consagra ese territorio a la cooperación internacional– sobre una parte de él. Chile habla de un “territorio antártico chileno”, cuyos límites fueron precisados en un decreto de

1940 como “todas las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciares y demás conocidos o por conocerse, en el mar territorial respectivo existente dentro de los límites del casquete constituido por los meridianos 53° y 90° de longitud oeste de Greenwich”.

Esta delimitación incluye la característica Península de la Antártida, también reivindicada por Argentina (los chilenos la llaman Península de O’Higgins y los argentinos de San Martín), pues el pretendido territorio argentino se superpone en parte con el chileno, como también con el reclamado por el Reino Unido a raíz de la disputa anglo-argentina por las Malvinas. Ese interés mutuo de ambos vecinos hace que Buenos Aires prefiera no dejar solo a los chilenos en su proyecto y que en la conexión por cable intervengan los dos países.

El proyecto, que todavía se encuentra en una fase de estudio de viabilidad, inicialmente uniría la población argentina de Ushuaia, en la orilla norte del Canal de Beagle, con la ciudad chilena de Puerto Williams, en el lado sur del canal, para reforzar los tendidos de fibra óptica entre ambos países. Después el cable iría de Puerto Williams a la Isla Rey Jorge y de allí se haría la conexión con la Península Antártica. En la Isla Rey Jorge se establecería el “Hub Científico Antártico”, el cual potenciaría el desarrollo de la investigación científica de los nueve países con bases permanentes en la isla: Argentina, Brasil, China,



Trazado en rojo, los dos cables proyectados desde Chile, sobre mapa de cables existentes [submarinecable.com]

Corea del Sur, Perú, Polonia, Rusia, Uruguay y, obviamente, Chile.

Los estudios de viabilidad están siendo llevados a cabo por Silica Networks, una compañía proveedora de servicios de conectividad a través de fibra óptica con presencia en Argentina, Brasil y Chile y que forma parte del Grupo Datco, un conglomerado regional de origen argentino especializado en soluciones de tecnología. Las filiales de la compañía en los tres países comprometieron más de 2.000 millones de dólares al estudio de lo que sería un ambicioso tendido de fibra óptica de más de mil kilómetros.

Conexión Sudamérica-Asia

Esta iniciativa debe ser vista dentro de las ambiciones tecnológicas chilenas a nivel global, que también miran hacia Asia. El 15 de julio de 2019 Chile firmó un convenio con CAF-Banco de Desarrollo de América Latina para financiar los estudios de viabilidad del proyecto Puerta Digital Asia-Sudamérica, ahora conocido como el Cable Humboldt. Aunque durante la fase de estudio parecía ser que Chile tendía más hacia la idea de una conexión con China (especialmente tras una visita oficial chilena a una fábrica de fibra óptica en aquel país), eventualmente este se

decantó por una ruta que conecte con Australia y Nueva Zelanda.

Las razones oficiales detrás de la decisión fueron la mejor rentabilidad de dicha ruta al ser la más corta y la posición de Australia como hub digital de Oceanía. No obstante, otro factor importante puede ser la tensión presente entre Estados Unidos y China. Las relaciones entre China y varios países de Latinoamérica fue uno de los principales puntos en la agenda del entonces secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo durante su visita a Chile en abril de 2019, donde expresó su preocupación por asuntos tales como la inversión china y el uso de la tecnología 5G, posiblemente influenciando la decisión chilena.

El 17 de diciembre de 2021, el Fondo de Infraestructura chileno, también conocido como Desarrollo País, anunció la selección de la compañía H2 Cable como socio para el Desarrollo del Cable Humboldt, concluyendo su fase de viabilidad e iniciando la fase de ejecución. Para la construcción de este proyecto de 650 millones de dólares, las partes han contratado a International Connectivity Services, empresa de servicios del Hawaiki Cable, un grupo de telecomunicaciones con experiencia previa en proyectos transpacíficos, como es el

caso de su más famoso proyecto, un ambicioso cable con conexiones entre Australia, Nueva Zelanda, Samoa Americana, Hawái y ciudades importantes de la costa oeste estadounidense tales como Seattle y Los Ángeles.

Implicación regional

Otro factor importante para la evolución de ambos proyectos de fibra óptica es el hecho de que parecen estar convirtiéndose en un proyecto de índole regional.

En el caso del proyecto de fibra óptica con la Antártida, el paso inicial es la conexión entre Ushuaia, de 75.000 habitantes, y Puerto Williams, de únicamente 2.000, lo que claramente mejora las condiciones de la localidad chilena, que apenas se ha beneficiado de grandes infraestructuras y solo ha tenido acceso a fibra óptica desde finales del 2020. Para Argentina la participación en el proyecto supone seguir de cerca la actuación chilena en el pasaje de Drake, un área que acoge nuevas disputas

territoriales entre ambos países y que afecta a 5.500 kilómetros cuadrados de la plataforma submarina.

En lo concerniente al proyecto de fibra óptica con Asia, primero Argentina y después Brasil firmaron su adhesión al proyecto a principios del 2021. Esto promete una mayor viabilidad económica al proyecto y maximiza su impacto final, especialmente tomando en cuenta que Brasil, Argentina y Chile representan aproximadamente el 80% del tráfico digital en Sudamérica.

El hecho de que el cable Humboldt evolucione a una iniciativa regional mejora las perspectivas de financiación, pero reduce el protagonismo inicial de Chile, que compite con Argentina y especialmente Brasil en los esfuerzos por posicionarse como líderes en el ámbito digital. No obstante, los presentes proyectos de fibra óptica todavía le dan una importante ventaja a Chile: ambos deben pasar por su territorio. ●

30 años de cooperación nuclear entre Brasil y Argentina para superar el recelo atómico

El acuerdo de 1991 permitió el desarrollo de la energía nuclear sin miedo mutuo: ambos países prevén contar con su cuarta planta para la producción eléctrica

° *No hay evidencia histórica de que estuvieran involucrados en un programa para producir armas nucleares, a pesar de declarar su derecho a las explosiones pacíficas.*

° *El proyecto argentino de central atómica con financiación china y la construcción de un submarino brasileño de propulsión nuclear levantan suspicacias entre otros vecinos.*

° *Bolivia acuerda con la rusa Rosatom la construcción de un centro de desarrollo de tecnología nuclear para aplicaciones en medicina y agricultura.*

EDUARDO VILLA CORTA

La cooperación nuclear entre Brasil y Argentina ha cumplido treinta años, constituyendo todo un ejemplo de cómo dos países que rivalizaron en programas secretos por temor a que su vecino lograra obtener la bomba atómica luego fueron capaces de aunar esfuerzos, en un ejercicio de confianza y transparencia, en el desarrollo de tecnologías pacíficas.

En 1991, la creación de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC) puso fin, dentro del proceso de democratización política e institucional que vivían ambos países, a los intentos que habían llevado a cabo las respectivas dictaduras militares en las décadas previas, en un contexto internacional de proliferación atómica, para adelantarse en capacidades nucleares. Desde entonces Brasil y Argentina se han centrado en el desarrollo de esa tecnología para usos civiles y pacíficos; son, junto con México, los únicos países de Latinoamérica que cuentan con centrales nucleares para la producción eléctrica.

Carrera nuclear

Los primeros planes en dirección a la proliferación nuclear en Brasil se remontan a 1951. Bajo el programa “Átomos por Paz”, en 1956 Estados Unidos entregó al Gobierno

brasileño un contenedor con uranio enriquecido al 90% con el que los científicos nacionales pudieron avanzar en su experimentación. Los programas se intensificaron con la llegada de la dictadura militar, en 1964, con tentativos de desarrollos por parte de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Esos avances supusieron la ruptura de los acuerdos que Brasil había establecido con Alemania Occidental para la ayuda tecnológica en materia nuclear. Si bien toda esa actividad se estaba llevando de manera sigilosa, en 1979 el presidente brasileño, el general João Baptista Figueiredo declaró públicamente que era imperativo tanto la obtención de uranio y su enriquecimiento en el propio país como un desarrollo tecnológico autóctono para poder avanzar los programas en marcha.

Los avances en Argentina en esa misma dirección fueron paralelos, si bien Brasil siempre consideró que su vecino iba por delante y estaba cerca de alcanzar la supremacía estratégica. Documentos de inteligencia brasileños de 1982 así lo indicaban, aunque también constataban que los argentinos no estaban todavía construyendo la aspirada bomba atómica.

Implicados en esa carrera, ambos rivales no se sumaron al compromiso de no proliferación que se estaba abriendo paso en la región por presión estadounidense, con la aprobación en 1967 del Tratado para la Prohibición de Armas



Elena Maceiras, secretaria de la ABACC, en la celebración de los 30 años de la agencia [ABACC]

Nucleares en América Latina y el Caribe, conocido también como Tratado de Tlatelolco. El texto en realidad admitía la posibilidad de explosiones nucleares a modo de test para fines pacíficos, un asunto que ofrecía cierta ambigüedad y al que se acogían tanto Brasilia como Buenos Aires.

No obstante, como se indica en el *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*, “no hay evidencia histórica, incluso después de dos décadas de acceso oficial y no oficial a documentos confidenciales, de que Brasil o Argentina estuvieran efectivamente involucrados en un programa para producir armas nucleares, a pesar de declarar su derecho a las explosiones pacíficas”. “Aparentemente”, según se confluje en el *Journal*, “el esfuerzo se limitó a actividades secretas destinadas a desarrollar tecnologías de doble uso que pudieran preparar a los países para la posterior producción de un dispositivo nuclear. Esta actividad, aunque secreta, no era ilegal ni violaba los acuerdos internacionales aplicables a ambos países en ese momento”.

Cooperación

El fin de las dictaduras militares en ambos países y la creciente adhesión del resto de países no nucleares al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de 1970 generaron un clima propicio para que Brasil y Argentina superaran la desconfianza mutua y se abrieran a la

cooperación. El proceso de acercamiento tuvo un primer paso en la Declaración de Iguazú de 1985; luego se dieron sucesivos entendimientos hasta llegar a la Declaración de Guadalajara de 1991, que permitió la creación el 18 julio de ese año de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares. Consolidada la nueva situación, ambos países ratificaron el Tratado de No Proliferación.

En la celebración de los 30 años de la ABACC, Argentina destacó que, gracias a la coordinación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), las inspecciones mutuas constituyen un mecanismo “único en el mundo”, pues la “robustez” del modelo de verificación “hace que los programas nucleares de ambos países estén sometidos a los más altos estándares de transparencia, demostrado por el hecho de que la Argentina y Brasil están entre los países que reciben la mayor cantidad de inspecciones en su territorio”.

Ya unos años antes, la Cancillería argentina había subrayado que, más allá de la inspección, existía una amplia cooperación en varias iniciativas, como la construcción del Reactor Multipropósito Brasileño y el RA-10 de Argentina, “dos proyectos emblemáticos conducidos conjuntamente por ambos países y capaces de abastecer todo el mercado regional del radioisótopo Molibdeno-99, clave en la industria medicinal”.

En cuanto a centrales nucleares, Brasil cuenta con dos reactores, Angra 1 y Angra 2, y espera que el Angra 3, cuya construcción se paralizó en 2015, entre en servicio en 2026. La producción eléctrica no llega al 4% del mix energético, pero el Plan Nacional de Energía 2050 prevé multiplicar por cinco la potencia instalada actualmente, gracias a la construcción de una cuarta planta. Por su parte, Argentina tiene tres centrales: Atucha I, que fue la primera instalación de energía nuclear en Latinoamérica, Embalse y Atucha II, cuya construcción estuvo paralizada durante un tiempo; tienen en conjunto una capacidad de generación del 7% de las necesidades eléctricas del país.

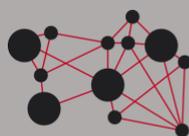
En ambos países, las dificultades financieras y las dudas sobre el futuro de la energía nuclear constituyeron un momento de duda para el impulso del sector, pero la incertidumbre que los acontecimientos internacionales suponen para la seguridad energética han vuelto a potenciarlo.

A pesar de la cooperación brasileño-argentina y de la que existe a un nivel regional más amplio, se dan algunos elementos de malestar entre algunos vecinos continentales. Por un lado, ha generado desconfianza que Argentina, que en su día ya tuvo tratos con Irán que fueron acogidos con suspicacia, haya llegado a un acuerdo para la construcción de una cuarta planta nuclear, Atucha III, con financiación china. Algo parecido ocurre con el acuerdo entre Bolivia y Rusia para que Rosatom construya en el país andino un centro de desarrollo de tecnología nuclear para aplicaciones en medicina y agricultura.

Por su parte, Brasil está desarrollando un submarino de propulsión nuclear (SSN); aunque no llevará armamento nuclear, supondrá un incremento de las capacidades navales del mayor país de la región. ●



Universidad
de Navarra



CENTER FOR
**GLOBAL
AFFAIRS**
& STRATEGIC STUDIES